



# Asamblea General

Distr. general  
11 de abril de 2017  
Español  
Original: inglés

---

**Consejo de Derechos Humanos**  
**Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal**  
**27º período de sesiones**  
1 a 12 de mayo de 2017

## **Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos\***

### **Sudáfrica**

---

\* El presente documento se reproduce tal como se recibió. Su contenido no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

GE.17-01924 (S) 200417 240417



\* 1 7 0 1 9 2 4 \*

Se ruega reciclar



## Introducción

*“Negar a las personas sus derechos humanos es poner en duda su humanidad misma.”*

Nelson Mandela

1. La República de Sudáfrica tiene el honor de presentar su informe correspondiente al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).

2. Desde el establecimiento de la democracia en Sudáfrica en 1994, el Gobierno sigue esforzándose por alcanzar sus ideales nacionales de realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. El ideal de la administración democrática de Sudáfrica es alcanzar la cohesión social y la identidad nacional, entre otras cosas, abordando de manera efectiva los flagrantes problemas de la desigualdad, la pobreza y el desempleo. En este sentido, Sudáfrica ha registrado progresos considerables hacia el logro de sus ideales nacionales y ha demostrado que sus instituciones de gobierno están madurando. Como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas y en virtud de su pertenencia al sistema de gobernanza mundial, Sudáfrica sigue reconociendo la trascendencia de la Carta de las Naciones Unidas, la primacía de los principios del derecho internacional, el compromiso con el multilateralismo y el respeto del estado de derecho.

## I. Metodología y proceso de consulta

3. En el presente informe se proporciona información actualizada sobre la evolución de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Sudáfrica durante el período que se está examinando, y se ponen de relieve los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones formuladas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en relación con el inicio del segundo ciclo del EPU en 2012. Durante el 21<sup>er</sup> período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en septiembre de 2012, Sudáfrica aceptó 152 recomendaciones y posteriormente elaboró un documento integral en el que formuló los proyectos de respuestas a estas.

4. Así pues, el presente informe es esencialmente un documento de síntesis elaborado sobre la base de la información obtenida de diversos departamentos gubernamentales, verificada por medio de la investigación y la información o las observaciones recabadas de algunas organizaciones no gubernamentales.

## II. Evolución de la situación desde el examen anterior

### Medidas constitucionales, legislativas y normativas

5. La Constitución de Sudáfrica prevé tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, justiciables ante los tribunales del país. Incorpora un amplio conjunto de normas de derechos humanos estructuradas en el derecho internacional público, que constituyen la base de nuestro orden constitucional y sitúan el logro de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el centro de todas las políticas y leyes gubernamentales. Constituyen el fundamento y el eje de todas las situaciones de derechos humanos en el país.

6. La Comisión Nacional de Planificación, establecida en 2009, ha elaborado el primer plan de largo alcance de Sudáfrica, el **Plan Nacional de Desarrollo: Visión 2030, que tiene por objeto eliminar la pobreza y reducir la desigualdad antes de 2030**. El Plan se aprobó en 2013 y se centra principalmente en el desarrollo de Sudáfrica en beneficio de todo su pueblo y la plena realización de los derechos humanos. El plan quinquenal del Gobierno, el Marco Estratégico de Mediano Plazo, coincide con el mandato de cinco años del Gobierno. El actual Marco persigue **14 resultados prioritarios generales**. Representa la primera fase de ejecución quinquenal del Plan Nacional de Desarrollo. El Marco abarca las esferas de atención prioritaria señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y el mandato

electoral del Gobierno: educación, salud, seguridad, crecimiento económico y empleo, desarrollo de aptitudes, infraestructura, desarrollo rural, asentamientos humanos, gobierno local, medio ambiente, relaciones internacionales, sector público, protección social, construcción nacional y cohesión social.

7. En aras del logro de los 14 resultados, el Gobierno emplea sus instrumentos de planificación y presupuestación para centrar su labor en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia, el Plan Nacional de Desarrollo se desglosa en las prioridades del Marco Estratégico de Mediano Plazo que, a su vez, se examinan y actualizan por medio de planes anuales de desempeño de cada departamento gubernamental; estos tienen por objeto hacer efectivos los derechos humanos consagrados en la Constitución<sup>1</sup>, en el marco de los recursos disponibles.

8. En 2014 el Gobierno consolidó sus funciones de planificación y de supervisión y evaluación en un único Departamento de Planificación, Supervisión y Evaluación con miras a institucionalizar la planificación de largo plazo en las tres esferas de gobierno a fin de garantizar la ejecución eficiente y eficaz de los programas.

9. En el capítulo 2 de la Constitución se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales que sustentan la normativa y el marco institucional dentro de los cuales se pueden adoptar medidas legislativas para dar efecto jurídico a esos derechos y libertades fundamentales. Cabe señalar también que el principio de la supremacía constitucional exige la rendición de cuentas del Gobierno y la creación de un marco para la justiciabilidad de los derechos socioeconómicos y culturales. La Constitución, en su capítulo 9, establece instituciones como la Oficina del Defensor del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas y la Comisión para la Igualdad de Género, que dependen únicamente de la Constitución y deben ejercer sus atribuciones y desempeñar sus funciones de manera imparcial e independiente.

10. Estas instituciones que figuran en el capítulo 9, junto con un poder judicial independiente, contribuyen a un marco normativo en que el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y de los imperativos constitucionales es obligatorio.

11. La Ley de Promoción de la Igualdad y la Prevención de la Discriminación Injusta, de 2000<sup>2</sup>, impide y prohíbe la discriminación injusta por los motivos establecidos en el artículo 9 de la Constitución, la cláusula de la “igualdad”, y proporciona un marco para su aplicación. La Ley estableció el Tribunal de Igualdad al que pueden recurrir en busca de asistencia todas las personas que se consideren perjudicadas por cualquier acto de discriminación. En el cuadro que figura a continuación se indican las cifras más recientes relativas al Tribunal de Igualdad.

Complaint	April to March		% change
	2014/15	2015/16	
Dissemination and publication that unfairly discriminates	28	26	-7.14
Harassment	77	32	-58.44
Hate speech	328	277	-15.55
Hate speech/harassment	57	0	-100.00
Unfair discrimination	291	179	-38.49
Unfair discrimination/dissemination and publication that unfairly discriminates	5	0	-100.00
Unfair discrimination/harassment	9	5	-44.44
Unfair discrimination/hate speech	11	34	209.09
Unfair discrimination/hate speech/harassment	10	0	-100.00
Not indicated	0	5	0.00
Grand total	844	558	-33.89

12. La promulgación de la **Ley de Prevención y Lucha contra la Tortura de Personas, de 2013**<sup>3</sup>, marca un hito importante en nuestro inquebrantable compromiso con la plena realización de los derechos humanos. La Ley hace efectivas las obligaciones de Sudáfrica dimanadas de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruces,

Inhumanos o Degradantes. Tiene por objeto prevenir y combatir la tortura de personas e imponer una pena máxima de 100 millones de rand sudafricanos o reclusión a perpetuidad, o ambas, en caso de fallo condenatorio.

13. Sudáfrica ha aprobado la **Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, de 2013**<sup>4</sup>. La Ley es un instrumento completo sobre la trata de personas. Sustituye a la antigua manera fragmentada de tratar esta cuestión, por medio de distintas leyes<sup>5</sup>. Además de tipificar como delitos muy concretos diversas formas de trata de personas, la Ley también otorga a las víctimas el derecho a reclamar a los autores de trata condenados una indemnización por daños y perjuicios, lesiones físicas y daños psicológicos sufridos.

14. La **Ley de Protección de la Información Personal, de 2013**<sup>6</sup>, trata de la privacidad de la información personal. Regula la protección de datos y la privacidad en Sudáfrica e impone una serie de obligaciones estrictas a todas las personas que se ocupan de la información personal. Protege el derecho a la vida privada, pero también prevé factores que deben tenerse en cuenta para lograr un equilibrio entre ese derecho y el derecho a la libertad de expresión. Al redactar la legislación, se prestó especial atención a garantizar que el proyecto de ley no restringiera indebidamente la libertad de prensa ni la expresión literaria o artística o la aplicación de la ley. La Ley prevé un **regulador de la información** independiente que reglamenta la aplicación de la ley. El Regulador de la Información fue nombrado y asumió funciones el 1 de diciembre de 2016.

15. El Gobierno ha introducido diversas medidas normativas y el Parlamento les ha dado efecto legislativo mediante la aprobación de no menos de 27 instrumentos legislativos pertinentes durante el período que se examina, que contribuyen a la promoción y protección de los derechos humanos<sup>7</sup>.

16. El artículo 26 de la Constitución dispone que todo ciudadano tiene derecho a acceder a una **vivienda** adecuada y que el Estado debe tomar medidas legislativas razonables y de otra índole, dentro de los recursos de que disponga, para alcanzar la realización progresiva de ese derecho. En aras de su cumplimiento, a marzo de 2016 el Gobierno seguía proporcionando viviendas a los pobres, en particular a los más vulnerables de ellos, como los ancianos, las mujeres, las familias encabezadas por niños y las personas con discapacidad. Desde entonces, la política del Gobierno ha cambiado de la mera provisión de viviendas a los pobres al desarrollo de asentamientos humanos integrados y sostenibles. Con arreglo a ese cambio de política, actualmente el Gobierno está construyendo viviendas integradas con infraestructura de servicios básicos, escuelas, centros de salud y espacios de recreación, comisarías de policía y otros servicios para posibilitar la realización de los derechos humanos. Con este fin, el Gobierno ha establecido el Subsidio Integrado para Asentamientos Humanos, que hasta marzo de 2016 proporcionó 153.000 unidades de vivienda. Además, el Gobierno ha establecido el Subsidio para el Desarrollo de Asentamientos Urbanos que se utilizará para mejorar la eficiencia y coordinación de esta iniciativa mediante la distribución de terrenos provistos de servicios para familias pobres, la financiación de infraestructura estructurante y la ejecución de proyectos de mejora de los asentamientos informales.

17. En el marco de la realización del derecho a un nivel de vida y de vivienda adecuados, el Gobierno ha dado prioridad al acceso al agua y el saneamiento. En consecuencia, prácticamente se ha duplicado la proporción de hogares cuya principal fuente de agua potable es el agua corriente que llega hasta el patio de la casa; del 16,6% en 1996 pasó al 30% en 2016. De 2011 a 2016 se registró una ligera disminución, del 0,2%, de los hogares cuya principal fuente de agua potable es el abastecimiento de agua corriente dentro de la vivienda. Algo menos de tres cuartas partes de los hogares utilizan agua corriente dentro de las viviendas/patios como fuente principal de agua. A diciembre de 2016, el 60,6% de los hogares tenían acceso a inodoros con descarga de agua conectados al sistema de alcantarillado, en comparación con el 57% en 2011. Además, ha aumentado la proporción de hogares que utilizan letrinas de pozo con ventilación y ha disminuido la proporción que utilizan letrinas de pozo sin ventilación. Asimismo, se ha registrado una disminución del número de viviendas sin retretes. Esta tendencia se observa en todos los períodos desde 2001. Hay una tendencia al aumento del número de hogares que utilizan letrinas químicas: del 1,9% en 1996 al 4,2% en 2016.

18. Desde 1994, el Departamento Nacional de Asentamientos Humanos ha gastado 10.000 millones de dólares de los Estados Unidos (a valores de 2010) para el **desarrollo de la vivienda y los asentamientos humanos**, mientras que otros organismos gubernamentales han gastado más de 1.200 millones de dólares en la ejecución de proyectos de infraestructura para la rehabilitación de asentamientos humanos. Mediante la inversión de capital el Estado ha creado puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos equivalentes a 1,29 millones de personas/año, y la inversión operacional ha permitido crear otros 10.800 puestos de trabajo. El precio promedio de las viviendas en el mercado ha aumentado cinco veces en los últimos 20 años, incluso para quienes reciben subsidios y para quienes tienen ingresos superiores aunque insuficientes para sufragar el costo de una vivienda sin subsidios. Más de 10.739 comunidades de 968 localidades y ciudades del país se beneficiaron del Programa de Vivienda del Gobierno.

19. La **Ley de Planificación Espacial y Gestión del Uso de la Tierra, de 2013**<sup>8</sup>, se aprobó específicamente para corregir el legado del *apartheid*. Los municipios están aplicando la Ley para reformular las pautas espaciales a fin de promover comunidades integradas sin divisiones de raza ni de clase. Los tribunales también han protegido los derechos de las personas que se enfrentan a desalojos al insistir en la equidad tanto de procedimiento como de fondo en los casos en que se solicitan órdenes de desalojo.

20. La **Encuesta Comunitaria de 2016** fue la segunda encuesta en importancia realizada por la Oficina de Estadística de Sudáfrica, después de la que se llevó a cabo en 2007. La Encuesta ha revelado una mejora considerable en el acceso a la vivienda.

Province	Census 1996		Census 2001		Census 2011		CS 2016	
	Households	(%)	Households	(%)	Households	(%)	Households	(%)
Western Cape	983 015	10,9	1 173 304	10,5	1 634 000	11,3	1 933 876	11,4
Eastern Cape	1 303 287	14,4	1 481 640	13,2	1 687 385	11,7	1 773 395	10,5
Northern Cape	218 339	2,4	245 086	2,2	301 405	2,1	353 709	2,1
Free State	625 011	6,9	733 302	6,5	823 316	5,7	946 639	5,6
KwaZulu-Natal	1 689 995	18,7	2 117 274	18,9	2 539 429	17,6	2 875 843	17,0
North West	591 240	6,5	760 588	6,8	1 062 015	7,3	1 248 766	7,4
Gauteng	2 069 512	22,8	2 791 270	24,9	3 909 022	27,1	4 951 137	29,3
Mpumalanga	669 801	7,4	785 424	7,0	1 075 488	7,4	1 238 861	7,3
Limpopo	909 371	10,0	1 117 818	10,0	1 418 102	9,8	1 601 083	9,5
<b>South Africa</b>	<b>9 059 571</b>	<b>100,0</b>	<b>11 205 705</b>	<b>100,0</b>	<b>14 450 161</b>	<b>100,0</b>	<b>16 923 309</b>	<b>100,0</b>

Source: Statistics South Africa, *Census 1996; Census 2001; Census 2011; CS 2016*

Note: Number of households for censuses based on population in conventional housing units.

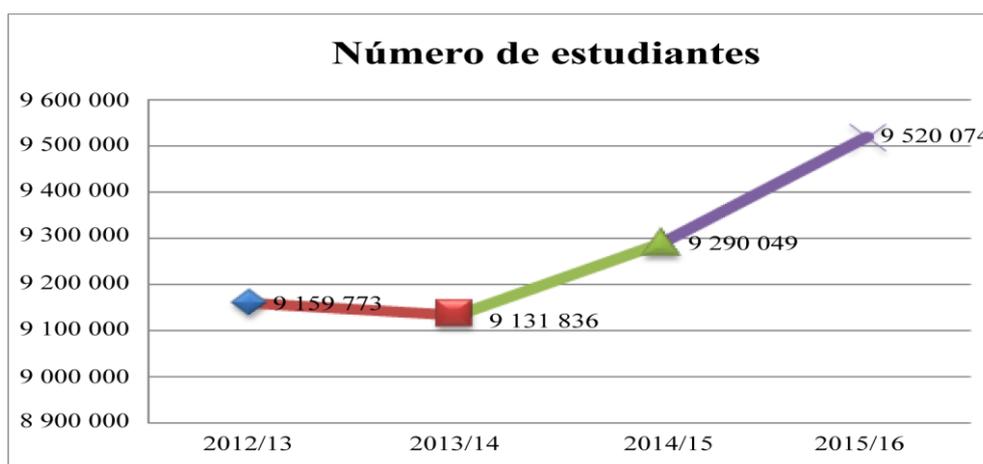
21. La reforma general del sector de la educación, que tuvo lugar entre 1994 y 2016, ha impulsado la transformación del sector. El compromiso del Gobierno con el sector ha quedado demostrado, no solo por las numerosas políticas en favor de la equidad y de la educación de los pobres, así como de otra índole, sino también por la gran cantidad de recursos disponibles para transformarlo y mantenerlo. Uno de los principales resultados de estas intervenciones ha sido el importante incremento del acceso a la educación. La proporción de jóvenes que finalizan la enseñanza primaria, secundaria y terciaria ha aumentado de forma constante a lo largo del tiempo. El principal proceso para evaluar el éxito de estas políticas consiste en el examen de los datos sobre educación, concretamente en relación con la asistencia a la escuela y las tendencias del rendimiento escolar. En el cuadro que figura a continuación se indica el número de personas de 5 años de edad o más que asisten a instituciones de enseñanza.

		Male	Female	Total
<b>Census 1996</b>	Attending	6 287 031	6 554 440	12 841 471
	Not Attending	9 931 337	11 383 638	21 314 975
	<b>Total</b>	<b>16 218 368</b>	<b>17 938 079</b>	<b>34 156 447</b>
<b>Census 2001</b>	Attending	7 228 100	7 286 653	14 514 754
	Not Attending	11 982 209	13 872 999	25 855 209
	<b>Total</b>	<b>19 210 310</b>	<b>21 159 653</b>	<b>40 369 962</b>
<b>Census 2011</b>	Attending	7 678 772	7 675 732	15 354 504
	Not Attending	13 202 450	14 604 735	27 807 185
	<b>Total</b>	<b>20 881 221</b>	<b>22 280 467</b>	<b>43 161 688</b>
<b>CS 2016</b>	Attending	8 589 596	8 684 415	17 274 011
	Not Attending	15 598 977	16 723 903	32 322 881
	<b>Total</b>	<b>24 188 574</b>	<b>25 408 318</b>	<b>49 596 892</b>

22. En todos los grupos de población se ha registrado un aumento de las personas que asistieron a una institución de enseñanza entre 1996 y 2016. El número de africanos negros que asistieron a una institución educativa aumentó de 10,5 millones en 1996 a 14,8 millones en 2016. La población de indios/asiáticos registró el menor aumento, de 300.775 personas en 1996 a 323.986 en 2016. El número de blancos que asistían a una institución educativa disminuyó de 980.474 en 2011 a 965.374 en 2016. Entre 1996 y 2016 hubo una gran disminución, de 1,4 millones, del número de personas no escolarizadas. El número de personas que finalizó la enseñanza primaria y secundaria también ha aumentado con el tiempo (de 8,3 millones en 1996 a 12,4 millones en 2016). El número de personas que obtuvo al menos una licenciatura aumentó considerablemente, en 824.564 personas entre 1996 y 2016. Si bien persisten las desigualdades entre los distintos grupos de población, los resultados han mejorado entre los grupos tradicionalmente desfavorecidos. Por ejemplo, el número de estudiantes universitarios africanos negros que se gradúan anualmente aumentó de unos 23.000 en 1996 a unos 63.000 en 2012.

23. También se han logrado importantes progresos en relación con la mejora del acceso a la educación de los niños con discapacidad mediante la aplicación de la Política de Educación Inclusiva consagrada en el Libro Blanco de Educación 6 (2001) y la Política sobre Reconocimiento, Identificación, Evaluación y Apoyo (2014). El número de estudiantes con discapacidad matriculados en escuelas especiales aumentó de 108.240 en 2011 a 119.972 en 2015. El número de niños con discapacidad matriculados en escuelas públicas ordinarias también ha aumentado, de 80.000 en 2011 a 111.430 en 2014. Para garantizar el acceso a una educación de calidad y el apoyo a los niños con discapacidad intelectual de severa a profunda, el Departamento de Educación Básica ha colaborado con los Departamentos de Salud, Desarrollo Social, Transporte, Obras Públicas y Gobernanza Cooperativa para elaborar un proyecto de política que se sometió a consulta pública en 2016. La Tesorería Nacional ha asignado una subvención de 477 millones de rand para asegurar el acceso a los servicios de este grupo vulnerable durante el período 2017 a 2019.

24. En 1994 el Gobierno instituyó el Programa Nacional de Nutrición Escolar, que tiene por objeto combatir el hambre y contribuir al aprendizaje escolar proporcionando a los alumnos comidas nutritivas de calidad. El Programa es financiado totalmente por el Estado mediante un presupuesto específico. A raíz de las recomendaciones formuladas por el Comité de Asuntos Fiscales y Finanzas en el estudio de 2006, el Programa se ha ampliado y ahora abarca a las escuelas primarias y secundarias. En la **figura 1** se indica el desempeño general del programa durante un período de cuatro años, a saber, los ejercicios económicos 2012/13 y 2015/16, en beneficio de 9,5 millones de estudiantes.



**Figura 1: Número de estudiantes beneficiados.**

25. El presupuesto del Programa ha aumentado en un 16%, de 4.906 millones de rand en 2012/13 a 5.703 millones de rand en el ejercicio económico 2015/16, lo cual ha permitido la provisión de un almuerzo caliente y equilibrado desde la perspectiva nutricional. Uno de los elementos fundamentales de la aplicación del Programa es el principio de la participación de la comunidad, que también incluye la colaboración de los órganos rectores de las escuelas para la prestación de asistencia en la gestión del Programa. En la actualidad, el Programa contrata los servicios de 4.395 empresas de tamaño pequeño y mediano para la adquisición y entrega de alimentos a las escuelas, promoviendo así el desarrollo económico local. Además, 52.585 voluntarias reciben un estipendio en reconocimiento de su labor de preparación y distribución de comidas.

26. En general, el presupuesto de educación ha aumentado a más del 5% del producto interno bruto (PIB); se trata, pues, de un presupuesto de educación favorable a los pobres. La educación pública es financiada por el Gobierno y se complementa mediante los derechos de matrícula escolar y/o la recaudación de fondos, con la salvedad de que la Ley relativa a las Escuelas de Sudáfrica, de 1996, prevé que los alumnos de familias pobres queden **exentos del pago de esos derechos**. En 2015, el 77% de los alumnos de escuelas públicas asistieron a escuelas primarias exentas del pago de derechos de matrícula, y el 76,7% de los estudiantes de escuelas secundarias públicas (grados 8 a 12) asistieron a escuelas exentas del pago de derechos.

27. El Gobierno se ha comprometido a erradicar las escuelas de adobe y a proveer servicios de agua, saneamiento y electricidad a través de la Iniciativa de Suministro Acelerado de Infraestructura a las Escuelas y el Programa Provincial de Construcción de Escuelas. Se han logrado progresos considerables en la prestación de servicios básicos (agua, saneamiento y suministro de energía), nuevas escuelas y el mantenimiento de las existentes. El Programa Provincial de Construcción de Escuelas se centra en la prestación de servicios básicos, nuevas escuelas, adiciones a las escuelas existentes, servicios nuevos y mejorados y mantenimiento de los servicios, mientras que la Iniciativa de Suministro Acelerado de Infraestructura a las Escuelas es un programa impulsado por el Departamento de Educación Básica para hacer frente al atraso en la construcción de infraestructura en todas las escuelas que no cumplen las normas básicas de seguridad. La finalidad del programa es la erradicación de las escuelas con estructuras totalmente inadecuadas y la prestación de servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad a las escuelas. Por medio de la Iniciativa, se han erradicado 173 estructuras inadecuadas, se ha suministrado agua a 615 escuelas, saneamiento a 425 y electricidad a 307. Ambos programas han facilitado conjuntamente la mejora de la infraestructura, lo que ha dado lugar a que una mayor proporción de niños más pequeños puedan acceder a las instalaciones escolares.

28. El artículo 27 1) de la Constitución garantiza a todas las personas, incluidas las que posean alguna discapacidad, el derecho a acceder a la **seguridad social** y, si no pueden mantenerse a sí mismas y a sus familiares a cargo, asistencia social adecuada. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas razonables, en el marco de los recursos disponibles, para lograr la realización progresiva de este derecho. La Ley de Asistencia Social, de 2004,

en su forma enmendada<sup>9</sup>, establece distintos tipos de subsidios sociales y ayuda social en casos de catástrofe, así como la gestión y prestación de estos beneficios sociales por conducto del Organismo de Seguridad Social de Sudáfrica.

29. La Ley del Organismo de Seguridad Social de Sudáfrica, de 2004<sup>10</sup>, prevé la gestión, la administración y el pago efectivos de la asistencia y los servicios sociales mediante la creación del Organismo de Seguridad Social de Sudáfrica. El Organismo también estableció la Inspección de Seguridad Social con el mandato de proteger los derechos de los beneficiarios. El cuadro que figura a continuación contiene una sinopsis del número y los tipos de subvenciones por región y por mes (en este caso, abril de 2016).

<i>Región</i>	<i>Personas de edad</i>	<i>Veteranos de guerra</i>	<i>Discapacidad</i>	<i>Donación</i>	<i>Subsidio para atención de familiares a cargo</i>	<i>Niños colocados en hogares de guarda</i>	<i>Pensión alimenticia</i>	<i>Total</i>	<i>Porcentaje del total</i>
Cabo Oriental	535 979	39	180 547	18 830	19 591	111 578	1 865 585	2 732 149	16,1
Estado Libre	188 011	2	73 445	2 848	6 732	36 752	666 354	974 144	5,7
Gauteng	516 268	66	111 597	4 466	16 858	53 374	1 724 569	2 427 198	14,3
KwaZulu-Natal	648 954	30	250 941	47 531	36 944	109 087	2 803 749	3 897 236	23,0
Limpopo	440 995	12	95 393	29 197	13 792	53 978	1 746 972	2 380 339	14,0
Mpumalanga	234 876	13	77 805	7 312	9 919	34 826	1 052 416	1 417 167	8,4
Cabo Septentrional	81 434	8	49 557	7 392	5 013	14 288	297 140	454 832	2,7
Noroccidental	240 262	6	81 431	8 234	9 086	36 780	814 783	1 190 582	7,0
Cabo Occidental	309 479	64	150 946	14 113	12 637	30 554	962 497	1 480 290	8,7
<b>Total</b>	<b>3 196 258</b>	<b>240</b>	<b>1 071 662</b>	<b>139 923</b>	<b>130 572</b>	<b>481 217</b>	<b>11 934 065</b>	<b>16 953 937</b>	
Porcentaje del total	18,9	0,0	6,3	0,8	0,8	2,8	70,4		

30. Un estudio reciente ha revelado que el Subsidio por Hijo a Cargo promueve el desarrollo en la primera infancia, reduce el retraso en el crecimiento, mejora la retención y los resultados escolares, aumenta el acceso a la atención de salud, disminuye el riesgo del trabajo infantil y contribuye a reducir las conductas adolescentes riesgosas en los grupos más vulnerables<sup>11</sup>.

31. Sudáfrica tiene muy en cuenta las vulnerabilidades relacionadas con la vejez. En 2016 el Gobierno publicó un documento de debate sobre una propuesta para introducir un sistema obligatorio de jubilación, que incluirá también prestaciones por fallecimiento y discapacidad. De conformidad con la propuesta, todas las personas económicamente activas cotizarían durante los años en que perciben un sueldo para poder recibir un ingreso mensual en caso de que no puedan trabajar debido a discapacidad o vejez, o sus familiares a cargo en caso de fallecimiento. La propuesta se ha presentado al Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo para ser debatida entre todos los interesados, incluidos el Gobierno, las empresas, y los sectores organizados y comunitarios.

32. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la obligación de llevar un registro nacional de las personas condenadas por maltrato de una persona de edad. El registro se utiliza para reducir el riesgo de reincidencia e impide que las personas condenadas que figuran en el registro trabajen en entornos que las pondrían en contacto con personas de edad. La Ley del Organismo de Seguridad Social exige que toda persona que sospeche que se ha sometido a malos tratos a una persona de edad o que ha sufrido una lesión relacionada con malos tratos notifique de inmediato a la autoridad gubernamental competente o a un agente de policía de sus sospechas. Por maltrato de una persona de edad se entiende “abuso físico, sexual, psicológico y económico”.

33. La Constitución establece que toda persona tiene derecho a **prácticas laborales justas**. Todo trabajador tiene derecho a formar sindicatos, afiliarse a ellos y participar en sus actividades, y declararse en huelga. Asimismo, los empleadores tienen derecho a formar organizaciones de empleadores, afiliarse a ellas y participar en sus actividades, así como a

proceder al cierre patronal cuando los trabajadores están en huelga. La Ley de Equidad en el Empleo, de 1998<sup>12</sup>, prevé el establecimiento de la Comisión de Equidad en el Empleo, que asesora al Ministro de Trabajo en cuestiones relativas a la transformación del mercado de trabajo. La Ley de Condiciones Básicas de Empleo se modificó en 2013 para mejorar las condiciones de los empleados<sup>13</sup>. La Ley de Relaciones Laborales, de 1995<sup>14</sup>, también se modificó en 2014 para facilitar el otorgamiento de derechos de organización a los sindicatos suficientemente representativos, y fortalecer el estatuto de las normas y los acuerdos relativos a piquetes, ofrecer mayor protección a los trabajadores contratados de forma temporal y regular el empleo mediante contratos de plazo fijo y de trabajadores a tiempo parcial cuya remuneración era inferior a un umbral determinado de ingresos<sup>15</sup>.

34. La Ley de Equidad en el Empleo (Enmienda), de 2013, y el Reglamento sobre la Igualdad en el Empleo, de 2014, establecen que es injusto que un empleador, sobre la base de un motivo prohibido, o motivos arbitrarios análogos, disponga distintas condiciones de empleo para personas que realizan el mismo trabajo, un trabajo similar o de igual valor. Esto se aplica tanto al género como a la raza. Durante el período que se examina, Sudáfrica también modificó el Código de la Ley de Equidad en el Empleo relativo al VIH y el Sida en el Lugar de Trabajo<sup>16</sup>.

35. El artículo 27 de la Constitución consagra el derecho de acceso a la **alimentación y al agua**. Sudáfrica, un Estado desarrollista, tiene el mandato de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos como la vivienda, el agua y el saneamiento. En 1994 el Gobierno democrático heredó elevados niveles de desigualdad y pobreza, que habían dejado a una gran proporción de la población sin acceso a servicios y recursos básicos. La Constitución otorga al Gobierno la responsabilidad de proporcionar servicios básicos a toda la población, en el marco de los recursos disponibles. Con respecto al derecho al agua y el saneamiento, cabe señalar que, de conformidad con la antigua Ley del Agua de Sudáfrica, el derecho a utilizar el agua pública estaba vinculado a la propiedad de la tierra por la que corrían los cursos de agua. El nuevo sistema de distribución de agua que se implantó apunta a preservar el acceso equitativo y a satisfacer las necesidades humanas básicas de las generaciones presentes y futuras, y reparar los resultados de la discriminación racial y de género del pasado. El acceso al agua potable es un derecho fundamental que también está relacionado con la salud, el bienestar y la seguridad de la población del país. La calidad y disponibilidad de los servicios de abastecimiento de agua son de suma importancia para la calidad de la vida humana y los niveles de vida. Las mejoras en el acceso al agua corriente en el último decenio pueden resumirse del siguiente modo.

Access to piped water	Census 1996	Census 2001	Census 2011	CS 2016
Inside the dwelling	3 976 855	3 617 603	6 684 621	7 511 853
Inside the yard	1 491 228	3 253 861	3 918 480	5 081 255
Access point outside the yard	1 765 945	2 594 904	2 581 146	2 625 645
No access to piped water	1 773 520	1 739 337	1 265 915	1 704 556
<b>Total</b>	<b>9 007 548</b>	<b>11 205 705</b>	<b>14 450 162</b>	<b>16 925 325</b>

36. En los últimos dos años, uno de los desafíos más acuciantes de Sudáfrica ha sido la grave sequía. A fin de mitigar los efectos de la escasez de agua a causa de la sequía, el Gobierno estableció el Equipo de Tareas Interministerial sobre la Prestación de Servicios para asegurar la continuidad de un abastecimiento fiable de agua en todas las comunidades. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en este sentido. Para responder a las presiones provocadas por la escasez de agua, el Gobierno ha asignado renovada prioridad a una asignación presupuestaria de 502 millones de rand. El Gobierno ha seguido suministrando infraestructura de almacenamiento de agua e infraestructura estructurante regional para ayudar a los municipios mediante la provisión de agua cruda de las presas a los sistemas de infraestructura estructurante para la red que lleva agua purificada a los hogares. Solo en el último año, los proyectos regionales de infraestructura estructurante terminados beneficiaron a más de 78.000 hogares y a más de 570.000 personas. Además, se proporcionó a 61.000 hogares un suministro básico o provisional de agua en 27 municipios de distrito prioritarios.

37. En Sudáfrica la Constitución garantiza el derecho a la atención de la salud. El artículo 27 de la Constitución dispone que toda persona tiene derecho a acceder a servicios de atención de la salud, incluida la atención de la salud reproductiva y el derecho a que no se le niegue atención médica de urgencia. A tal fin, la Ley Nacional de Salud de 2003 (Ley núm. 61 de 2003) proporciona un marco y una base para los servicios de atención de la salud en Sudáfrica, teniendo en cuenta los imperativos de atención de la salud constitucionales, provinciales y nacionales.

38. El Plan Nacional de Desarrollo traza la visión de un sistema de salud de Sudáfrica que se compromete a garantizar “una vida larga y sana para todos los sudafricanos” antes de 2030. Para 2030, el Plan se propone aumentar la esperanza de vida de los sudafricanos a por lo menos 70 años; lograr que la generación de menores de 20 años esté mayormente libre del VIH; reducir la carga de morbilidad; alcanzar una tasa de mortalidad infantil de menos de 20 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, incluida una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de menos de 30 por cada 1.000; lograr un cambio significativo en la equidad, la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud; alcanzar la cobertura universal; y reducir considerablemente los determinantes sociales de las enfermedades y los factores ecológicos desfavorables.

39. Ya pueden observarse progresos significativos en varias esferas de la atención de la salud, como el aumento de la tasa de esperanza de vida; el informe parcial más reciente de vigilancia de la mortalidad publicado en diciembre de 2016 indica que la esperanza de vida en Sudáfrica aumentó a 63,3 años, de 57,1 en 2009. También ha mejorado la tasa de mortalidad.

<i>Indicadores de los efectos</i>	<i>Datos de referencia, 2009</i>	<i>Situación actual, 2015 (publicado por el Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas, diciembre de 2016)</i>	<i>Metas del Marco Estratégico de Mediano Plazo, 2019</i>	<i>Metas del Plan Nacional de Desarrollo, 2030</i>
Esperanza de vida al nacer (total)	56,5 años	63,3 años	65 años	70 años
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años	56 muertes por cada 1.000 nacidos vivos	39 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos	33 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos	30 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad neonatal	–	14 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos	8 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos	
Tasa de mortalidad infantil	39 muertes por cada 1.000 nacidos vivos	28 muertes de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos	23 muertes de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos (disminución del 15%)	20 muertes de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad materna	304 muertes por cada 100.000 nacidos vivos	154 muertes por cada 100.000 nacidos vivos	<100 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos	

40. Las tendencias de la esperanza de vida de la población consignadas más arriba corroboran las estimaciones de mediados de año sobre la población publicadas por la Oficina de Estadística de Sudáfrica en agosto de 2016, que indican que la esperanza de vida en Sudáfrica aumentó de 56,4 años en 2009 a 62,4 años.

41. Sudáfrica tiene una carga de morbilidad cuádruple que incluye enfermedades transmisibles como el VIH y el sida y la tuberculosis, la elevada tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil, el aumento de las enfermedades no transmisibles y elevadas tasas de violencia, lesiones y traumas. El fortalecimiento de la eficacia del sistema de salud es la base en que se sustenta el éxito de las intervenciones para mejorar los resultados en

materia de salud. Reducir la carga de morbilidad depende de un sistema de salud que funcione bien y que se base en los principios de la prestación de servicios de salud accesibles, equitativos, eficientes, asequibles, adecuados y de calidad.

42. Sudáfrica se propone lograr la cobertura sanitaria universal para 2030 mediante la política del Seguro Nacional de Salud. Dicha política tiene por objeto “reunir fondos para proporcionar acceso universal a servicios de salud personales asequibles y de calidad para todos los sudafricanos sobre la base de sus necesidades de salud, independientemente de su situación socioeconómica”.

43. En la actualidad, el sistema de atención de la Salud de Sudáfrica se enfrenta con muchas desigualdades heredadas del pasado Gobierno no democrático. El Libro Blanco del Seguro Nacional de Salud publicado el 10 de diciembre de 2015 dispone que Sudáfrica asigne el 8,5% de su PIB a la salud; sin embargo, las prestaciones de atención de la salud en Sudáfrica favorecen principalmente a los ricos, que reciben el 36% de todas las prestaciones, a pesar de que sus necesidades de atención de la salud equivalen a menos del 10%.

44. El Gobierno, por conducto de su Departamento de Salud, ha establecido seis líneas de trabajo del Seguro Nacional de Salud con los siguientes objetivos: preparar el establecimiento del Fondo del Seguro Nacional de Salud; formular y hacer efectivas las prestaciones del servicio de atención de la salud del Seguro Nacional de Salud; establecer la separación entre compradores y proveedores y acreditar a estos últimos; determinar el papel de los planes médicos en el entorno del Seguro Nacional de Salud; ultimar el documento de política del Seguro Nacional de Salud para su publicación y consolidar el Sistema de Salud de Distrito. En el Marco de Gastos a Mediano Plazo, a partir del ejercicio económico 2017/18, las actividades se centrarán en el establecimiento del Fondo del Seguro Nacional de Salud. El Fondo, con el apoyo de la Oficina de Control del Cumplimiento de las Normas Sanitarias, iniciará el proceso de acreditación de dispensarios ideales, proveedores privados de atención primaria de la salud y hospitales públicos, una vez certificados.

45. El Gobierno ha hecho importantes avances hacia el fortalecimiento del sistema de atención primaria de la salud de Sudáfrica mediante la reconversión de la aplicación del sistema de atención primaria de salud por conducto de cuatro medios, a saber: equipos de apoyo clínico especializado de distrito; equipos de divulgación de atención primaria de la salud basados en pabellones; el programa de salud basado en escuelas; y la contratación de médicos generalistas y otros proveedores para trabajar en centros de atención primaria de la salud.

46. También se observan avances en la aplicación del Programa de Realización y Mantenimiento de Dispensarios Ideales, que tiene por objeto mejorar la calidad de los servicios de salud y afianzar la prestación de servicios. En 2014 se inició la Operación Phakisa 2: Promoción de la Realización y el Mantenimiento de Dispensarios Ideales para acelerar la ejecución de los programas prioritarios del Gobierno. Mediante la Operación Phakisa 2, el sector de la salud pública procura mejorar la calidad de la atención prestada en 3.500 centros de atención primaria de salud, integrados por dispensarios gubernamentales y centros de salud comunitarios. Esta labor entraña la transformación de los dispensarios y los centros comunitarios de salud en dispensarios ideales, que todos los sudafricanos puedan utilizar, por elección, como resultado de la mejora de la calidad de los servicios que prestan. A finales de marzo de 2016, había en total 312 instalaciones de salud en las categorías de dispensarios ideales plata, oro y platino.

47. Para hacer frente a los desafíos del VIH y los efectos de largo alcance del sida, el Gobierno ha adoptado un planteamiento multisectorial. En 2011, el Consejo Nacional Sudafricano sobre el Sida, en el que están representados el Gobierno, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, examinó la aplicación de estos planes estratégicos y elaboró un amplio programa de prevención, atención y tratamiento para el siguiente plan quinquenal (2012-2016).

48. Actualmente Sudáfrica tiene el mayor programa de terapia antirretroviral del mundo. A fines de marzo de 2016, 3.407.336 pacientes seguían recibiendo terapia antirretroviral. La prevención es el pilar de la lucha contra el VIH y el sida. Desde la puesta en marcha de la campaña de asesoramiento y pruebas de detección del VIH en 2010, más de 44 millones

de personas se han sometido a pruebas. En total se sometieron a pruebas de detección 11.898.308 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años, lo cual superó la meta anual de 10 millones de personas para el ejercicio económico 2015/16.

49. Sudáfrica es uno de los primeros países del mundo que aplicó la nueva tecnología de diagnóstico de la tuberculosis (GeneXpert). En la actualidad, aproximadamente el 50% del volumen total de esas pruebas que tienen lugar en el mundo para diagnosticar la tuberculosis se realizan en Sudáfrica. Además, el 60% de los pacientes a nivel mundial tratados con bedaquilina (el medicamento más nuevo para tratar la tuberculosis resistente) se encuentran en Sudáfrica. El 63% de las personas seropositivas que reciben tratamiento, a nivel mundial, a fin de evitar que contraigan tuberculosis (tratamiento preventivo intermitente con isoniacida) también están en Sudáfrica. En 2014 el Gobierno puso en marcha un programa masivo de detección de la tuberculosis en centros penitenciarios, minas y seis comunidades próximas a emplazamientos mineros. En 2015 se realizaron pruebas de detección en 569.475 reclusos de centros penitenciarios durante la admisión, el encarcelamiento y antes de su puesta en libertad; y el 97,3% de las 221 minas controlables proporcionan a sus empleados un diagnóstico inicial de tuberculosis. Además, 30 millones de personas fueron sometidas a pruebas de detección de la tuberculosis en centros de salud pública en 2015.

50. A fin de mejorar el acceso a servicios de atención prenatal y empoderar a las mujeres embarazadas, en agosto de 2014 el Departamento de Salud puso en marcha el Programa MomConnect por medio del cual las mujeres embarazadas se registran a través de sus teléfonos móviles para recibir mensajes semanales apropiados a la etapa de su embarazo. Las mujeres embarazadas también pueden enviar quejas y comentarios favorables (no solicitados) sobre los servicios recibidos en dispensarios públicos. Al 31 de marzo de 2016, un total de 917.053 mujeres embarazadas estaban registradas y el Departamento de Salud había recibido 753 quejas y 4.746 comentarios favorables.

51. En 2015/16 el Departamento de Salud puso en marcha la Encuesta de Demografía y Salud a fin de hacer un seguimiento de los progresos en el estado de salud de la población de Sudáfrica respecto de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de un estudio crítico que proporcionará datos esenciales para orientar la política y la gestión de los programas estratégicos. Abarca indicadores demográficos, de programas de salud materna, neonatal e infantil, de salud reproductiva y métodos anticonceptivos, de gestión de las enfermedades no transmisibles y de factores de riesgo, así como de la situación de la mujer en la sociedad, y serán de gran ayuda para el Gobierno en relación con su compromiso de hacer realidad la visión de “una vida larga y sana para todos los sudafricanos”.

52. Sudáfrica se ha convertido en un importante punto de tránsito y de destino de corrientes migratorias mixtas. Los **ciudadanos extranjeros** gozan de todos los derechos consagrados en la Constitución, con excepción de algunos derechos civiles y políticos reservados a los ciudadanos solamente. Sudáfrica sigue siendo un importante destino de solicitantes de asilo y una gran variedad de migrantes en busca de mejores oportunidades sociales y económicas.

53. Los niños migrantes no acompañados que entran en Sudáfrica son alojados en centros de atención de niños y adolescentes y se les brinda la atención y protección que necesitan. A menudo resulta difícil localizar a sus familias para repatriarlos a sus países de origen. En consecuencia, esos niños permanecen en el país durante mucho tiempo. Sudáfrica ha tomado conocimiento de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, que recomienda el fortalecimiento de la reunión sistemática de datos desglosados sobre los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados y la aceleración de la elaboración de un protocolo para racionalizar la prestación oportuna de servicios de protección a los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

54. En 2012 el Gobierno convocó una Cumbre Nacional sobre Cohesión Social en la que se examinaron los progresos realizados con miras a la creación de una sociedad sudafricana solidaria y orgullosa y el establecimiento de una plataforma para debatir la Estrategia Nacional para el Desarrollo de una Sociedad Sudafricana Inclusiva. En la Cumbre se reconoció que la cohesión social dependía en gran medida de la capacidad de las

comunidades, como parte de la sociedad, para hacer frente a este desafío y aprobó un programa de acción y una declaración en los que reconoció los problemas con que se enfrentaba Sudáfrica para la construcción de una sociedad no racial, no sexista y unida después de 1994.

55. Los ataques contra ciudadanos extranjeros en el pasado y recientemente, en 2015, dieron como resultado la pérdida de vidas y daños materiales. El Gobierno condenó enérgicamente esos ataques y los organismos encargados de hacer cumplir la ley intervinieron para detener los ataques e impedir que se extendieran a otras partes del país. El restablecimiento de la paz y el orden público en nuestras comunidades se coordina en el más alto nivel de gobierno. El Presidente Jacob Zuma convocó reuniones con interesados en Sudáfrica para examinar la política migratoria del país y la forma en que diversos sectores pueden trabajar con el Gobierno para promover la migración ordenada y las buenas relaciones entre los nacionales y los ciudadanos extranjeros. Las cuestiones relacionadas con la violencia y la discriminación contra los ciudadanos extranjeros se están abordando por conducto de tres principales comités interministeriales, a saber, el Comité Interministerial sobre Migración, el Comité Interministerial sobre Cohesión Social y el Comité Interministerial sobre Políticas de Población.

56. En lo que respecta al párrafo 133 de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el Gobierno ha organizado actividades de capacitación sobre los derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El objetivo de esa capacitación es conseguir que las medidas adoptadas para aplicar la legislación sobre inmigración cumplan las obligaciones internacionales del Gobierno y promuevan una cultura de derechos humanos en la forma prevista por la Constitución y la Ley de Inmigración<sup>17</sup>.

57. El Gobierno propone una visión de Sudáfrica como país que fomenta la migración internacional para el desarrollo. El **Libro Verde sobre la Migración Internacional (2016)** sostiene que no es conveniente ni posible detener la migración internacional. Llega a la conclusión de que la migración internacional es un fenómeno natural y mayormente positivo que, si se gestiona bien, puede hacer, hace y hará una contribución fundamental al crecimiento de la economía de Sudáfrica y la transformación de África, como se establece en la Agenda 2063.

58. El Gobierno ha elaborado un proyecto de **plan de acción nacional para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia**, en colaboración con varios interesados, incluida la sociedad civil. El proyecto servirá de base para un plan que orientará la elaboración de una política pública integral contra la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. El proceso relativo a la elaboración de un plan nacional de acción para Sudáfrica surgió de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. El proyecto del plan nacional de acción se publicó y, tras la aportación de observaciones de junio a agosto de 2016, actualmente se está modificando para su presentación al Gabinete a fin de que lo examine y apruebe a finales de este año.

59. En octubre de 2016 el Gabinete de Ministros aprobó la publicación del **proyecto de ley de prevención y lucha contra los delitos motivados por prejuicios y el discurso de odio** para que el público formulara observaciones. El proyecto de ley tipifica los delitos motivados por prejuicios y el discurso de odio, y también tiene por objeto poner en práctica medidas para prevenir y combatir esos delitos. Según el proyecto de ley, por delito motivado por prejuicios se entiende todo delito reconocido de *common law* o tipificado como “crimen o delito de base” cuya comisión esté motivada por un sesgo, prejuicio o intolerancia ilícitos. Tras una consulta pública y los comentarios pertinentes, el proyecto de ley es objeto de una nueva redacción.

60. La **seguridad de las mujeres y los niños** en las comunidades de Sudáfrica es fundamental. La violencia sexual contra los niños sigue siendo un problema importante y Sudáfrica ha tomado conocimiento de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre las bajas tasas de denuncia, enjuiciamiento y condena de los autores; la falta generalizada de servicios de apoyo para los niños víctimas y la disparidad de dichos servicios entre las distintas regiones, incluidos los servicios de emergencia, así como la

excesiva dependencia de organizaciones de la sociedad civil para la prestación de esos servicios.

61. El Gobierno ha establecido Centros de Atención Thuthuzela con el objeto de reducir la victimización secundaria. En 2011 el Secretario General de las Naciones Unidas reconoció estos centros como “modelo mundial de mejores prácticas” en la esfera de la gestión de la violencia de género y la respuesta a esta. El enfoque integrado de los Centros de Atención Thuthuzela respecto de los supervivientes de agresión sexual se basa en el respeto, el apoyo, el restablecimiento de la dignidad y la garantía de la justicia para las víctimas de la violencia sexual.

62. La gestión del modelo de los Centros de Atención Thuthuzela y su implantación progresiva compete a la Fiscalía Nacional. Su éxito se basa en la cooperación eficaz y eficiente de los distintos interesados de los departamentos gubernamentales, y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil designadas. El modelo se centra específicamente en las víctimas y está orientado a los tribunales, la investigación de los delitos por la fiscalía y la cooperación de los interesados. El objetivo final es reducir la victimización secundaria, acortar el ciclo de tramitación de los casos y aumentar las tasas de condena de estos.

63. El Servicio de Policía de Sudáfrica ha establecido dependencias especializadas en violencia familiar, protección de la infancia y delitos sexuales a fin de prestar servicios adaptados a las víctimas de la violencia de género. Al denunciar un delito, la víctima es trasladada de un entorno como una comisaría de policía, a un entorno más favorable antes de ser transportada por la policía o una ambulancia a un Centro de Atención Thuthuzela en un hospital.

64. El Gobierno ha impartido formación a proveedores de servicios de empoderamiento de las víctimas en las nueve provincias del país y también ha establecido Centros de Atención Integral Khuseleka que ofrecen servicios integrados de empoderamiento de las víctimas. El Gobierno también ha establecido refugios para mujeres víctimas de maltrato, “centros de la puerta blanca” (o centros de esperanza) para víctimas de la violencia de género en distintas provincias y un centro de mando que recibe llamadas sobre violencia de género las 24 horas del día que ha obtenido numerosos premios internacionales. La Campaña de Sudáfrica 365 Días (que se inició con la campaña 16 Días de Activismo para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres y los Niños, celebrada en noviembre y diciembre) ha movilizado a todos los sectores de la sociedad para que los hombres y los niños participen en la búsqueda de la solución a fin de erradicar la violencia contra las mujeres y los niños.

65. En 2014 el Gobierno finalizó la elaboración de una **Estrategia Nacional para la Gestión Intersectorial de los Delitos Sexuales**, que alienta un planteamiento intersectorial respecto de todas las cuestiones relacionadas con delitos sexuales tramitadas por los tribunales competentes. En la Estrategia se establecen claramente los deberes y responsabilidades de todos los interesados en el establecimiento y la gestión de esos tribunales. El Plan Estratégico Nacional también prevé el número mínimo de efectivos uniformados necesarios en los tribunales que se ocupan de delitos sexuales<sup>18</sup>. Todas las víctimas deben tener acceso a servicios como el programa de preparación judicial; material de información en forma de textos, imágenes y publicaciones en braille; asignación de alimentos para niños, programas para el personal que trabaja con víctimas de violencia sexual que pudiera haber sido afectado indirectamente por traumas, así como un sistema de gestión de casos y una política de selección que asigne los casos de delitos sexuales a los tribunales competentes cuando estos existan.

66. La cláusula de igualdad contenida en la Constitución (art. 9) menciona expresamente el estado civil como uno de los motivos por los que se prohíbe la discriminación injusta. El **Libro Blanco sobre las Familias en Sudáfrica** del Departamento de Desarrollo Social dispone que, junto con la economía, el sistema de gobierno y la educación, la familia debe considerarse de manera universal uno de los sectores esenciales sin el cual ninguna sociedad puede funcionar. La familia influye en la forma en que la sociedad está estructurada, organizada, y en cómo funciona.

67. El Gobierno, en colaboración con las partes interesadas, elaboró una estrategia para abordar las cuestiones relativas a la violencia de género y orientación sexual contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Sudáfrica. En 2013 se restableció un **Grupo de Trabajo Nacional** con el Gobierno, junto con representantes de las instituciones del capítulo 9 y las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en la ejecución de un conjunto de monumentales tareas. Estas incluyen, entre otras, la elaboración de una estrategia nacional de intervención para abordar y prevenir delitos violentos basados en el género y la orientación sexual perpetrados contra las personas LGBTI y la formulación de un plan de ejecución intersectorial que vincule las iniciativas paralelas y complementarias. El Grupo de Trabajo Nacional también se comprometió a fortalecer la capacidad del Gobierno para responder a las necesidades de las personas LGBTI y las competencias de las organizaciones de la sociedad civil para prestar servicios conexos. El Gobierno se esfuerza por mejorar los vínculos entre los departamentos gubernamentales, para ejecutar programas como el Programa de Acceso a la Justicia y Promoción de los Derechos Constitucionales, así como el Plan de Acción Nacional, en estrecha colaboración con las instituciones pertinentes de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión para la Igualdad de Género, para luchar contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y de esa manera hacer frente a los efectos de las diferentes formas de discriminación contra las personas LGBTI. Pretende mejorar la gestión de los casos por los actores pertinentes del sistema de justicia penal, incluidos el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Fiscalía Nacional, el Departamento de Desarrollo Social, el Departamento de Salud y el Departamento de Servicios Penitenciarios

68. Sudáfrica ha adoptado medidas importantes para mejorar la coordinación entre el Gobierno y la sociedad civil en la lucha contra la violencia (en particular la violación y el asesinato) contra las personas LGBTI<sup>19</sup>.

69. El Gobierno está realizando grandes avances para que las personas LGBTI sean tratadas como ciudadanos en pie de igualdad y para que se aborden los problemas que impiden el ejercicio de sus derechos. El Gobierno no permite prácticas discriminatorias respecto del matrimonio de parejas del mismo sexo, ni formas de trato degradante o nocivo de personas transgénero. El compromiso del Gobierno de proteger los derechos de las personas LGBTI en Sudáfrica se puso de manifiesto recientemente mediante la adopción de medidas por el Ministro del Interior, que rechazó la solicitud de visado de un clérigo conocido por predicar la homofobia desde el púlpito. El Ministro del Interior ha establecido un equipo de tareas para hacer frente a situaciones similares en el futuro<sup>20</sup>.

70. A fin de garantizar que las personas indigentes reciban una representación letrada competente y adecuada en los tribunales, **Legal Aid South Africa**, organismo estatutario autónomo, facilita o pone a disposición de las personas indigentes representación letrada sufragada por el Estado<sup>21</sup>.

71. Para reducir el **hacinamiento en las cárceles**, el Gobierno puso en marcha el sistema de vigilancia electrónica de las personas en libertad condicional en febrero de 2012, como parte de la transformación de nuestros sistemas de libertad condicional y reintegración social. Este sistema disminuye la probabilidad de que las personas en libertad condicional se fuguen del sistema correccional comunitario y al mismo tiempo reduce el riesgo de reincidencia. En 2012 el Gobierno inauguró la primera residencia de transición para las personas en libertad vigilada en la provincia de Gauteng. Este fue el comienzo de una nueva era en la prestación de servicios de integración social a los infractores.

72. Operación Funda<sup>22</sup> (Operación Aprender) es un proyecto del Gobierno iniciado en 2011 para mejorar el acceso de los infractores a la educación y la capacitación a fin de prepararlos para una reintegración social eficaz y sostenible. La finalidad del sistema penitenciario no es el castigo, sino la protección de la población, la promoción de la responsabilidad social y el fomento del desarrollo humano para prevenir la reincidencia y que los infractores vuelvan a incurrir en la delincuencia. El Gobierno insiste en que las personas que abandonan los centros penitenciarios deben tener las actitudes y competencias adecuadas para poder reintegrarse con éxito en la sociedad como ciudadanos productivos y respetuosos de la ley. Por consiguiente, el Gobierno lleva a cabo una serie de intervenciones de rehabilitación para delincuentes, junto con las acciones educativas

pertinentes, con el fin de fortalecer las medidas de rehabilitación, así como todo el proceso de integración del infractor. A partir de abril de 2013, es obligatorio que todos los reclusos completen el ciclo de educación y capacitación básica para adultos y los niveles de formación 1 a 4.

73. El **Libro Blanco sobre Detención Preventiva** se aprobó como política en marzo de 2014. Tienen por objeto formular una estrategia para hacer frente a los altos niveles de hacinamiento en los centros de detención de Sudáfrica de presos en espera de juicio.

## Doctrina jurídica

74. Las sentencias de los tribunales de Sudáfrica se tienen permanentemente en cuenta en las políticas del Gobierno para asegurar el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos en el país.

75. La Ley de la 17ª Enmienda de la Constitución, de 2012, y la Ley de Tribunales Superiores, de 2013<sup>23</sup>, son medidas legislativas destinadas a afirmar la independencia del poder judicial. Estas medidas legislativas reconocen al Presidente de la Corte Suprema como jefe del poder judicial, que ejerce la responsabilidad sobre el establecimiento y la supervisión de las reglas y normas para el ejercicio de las funciones judiciales y la actuación de todos los tribunales.

76. El poder judicial independiente, como uno de los tres poderes del Estado, ha desempeñado un papel decisivo en la defensa de los valores constitucionales de Sudáfrica, como la dignidad humana, la igualdad y la supremacía de la Constitución. Si bien se han logrado avances significativos en lo que respecta a la transformación de la judicatura, también es necesario adoptar medidas, entre otras cosas, para asegurar que un mayor número de mujeres sean nombradas a la magistratura.

77. Durante el período que se está examinando, los tribunales han dictado sentencias relativas a un número considerable de casos relacionados con diversos aspectos de los derechos humanos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que es el máximo tribunal, dictó 35 sentencias en 2012, 47 en 2013, 43 en 2014, 43 en 2015 y 17 en 2016. Además, los diversos tribunales superiores, los tribunales de primera instancia, los tribunales de igualdad y los tribunales especializados, como el Tribunal de Reclamaciones sobre Tierras y el Tribunal de Trabajo, dictan numerosas sentencias.

78. El caso del *Ministro del Interior c. Tsebe*<sup>24</sup> constituye un ejemplo esclarecedor de cómo los valores constitucionales afectan y orientan las diversas actividades del Estado. En este caso, el Tribunal Constitucional aclaró algunos aspectos de la extradición, así como otros relativos a la deportación y la estancia en Sudáfrica. El Tribunal sostuvo: “Si nosotros, como sociedad o Estado, entregamos a una persona a otro Estado en el que se enfrentaría con el riesgo real de la pena de muerte, no estamos protegiendo, respetando ni promoviendo el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de esa persona, derechos estos que nuestra Constitución otorga a todas las personas”<sup>25</sup>.

79. Los tribunales de Sudáfrica también se pronunciaron sobre la realización de varios derechos socioeconómicos. Por ejemplo, durante el período que se examina, importantes decisiones de los tribunales contribuyeron a mejorar la realización del derecho a la educación. La sentencia dictada por el órgano rector de la *Escuela Primaria de Rivonia c. el Miembro del Consejo Ejecutivo del Departamento de Educación de Gauteng*<sup>26</sup> pone de relieve la persistencia de las disparidades raciales en nuestro sistema escolar. En la sentencia el tribunal sostuvo que los órganos rectores de las escuelas pueden no tener facultades para decidir sin reservas la política de admisión a las escuelas públicas. En los casos *Jefe de Departamento, Departamento de Educación, Provincia del Estado Libre c. Escuela Secundaria de Welkom*; y *Jefe de Departamento, Departamento de Educación, Provincia del Estado Libre c. Escuela Secundaria de Harmony*<sup>27</sup>, el tribunal tomó en consideración los derechos de las alumnas embarazadas y las políticas que establecen que las alumnas embarazadas no deben asistir a la escuela durante un período de tiempo

determinado<sup>28</sup>. El tribunal sostuvo que esas políticas vulneran los derechos constitucionales de las alumnas embarazadas y, por consiguiente, dispuso que se las revisara.

## **Instituciones de derechos humanos**

80. Se han establecido varias instituciones para apoyar la realización de los derechos humanos en Sudáfrica. El capítulo 9 de la Constitución establece diversas **instituciones del Estado que apoyan la democracia constitucional**. Estos órganos son, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, que se encarga de promover el respeto de los derechos humanos y una cultura de derechos humanos, fomentar la protección, el desarrollo y el logro de los derechos humanos y la vigilancia y evaluación de la observancia de los derechos humanos en el país. La Comisión es un órgano independiente y solo debe rendir cuentas ante el Parlamento. La Comisión debe pedir anualmente a los órganos pertinentes del Estado que le proporcionen información sobre las medidas adoptadas para la realización de los derechos relativos a la vivienda, la atención de la salud, la alimentación, el agua, la seguridad social, la educación y el medio ambiente. Otros órganos son la Comisión para la Igualdad de Género, la Oficina del Defensor del Pueblo y la Comisión para la Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas.

## **Infraestructura de derechos humanos**

81. El Gobierno reconoce que la sociedad civil desempeña un papel importante en la búsqueda de una democracia más sólida en Sudáfrica. La sociedad civil, que funciona fuera del ámbito del Estado y es independiente del mercado, se suele denominar el tercer sector. Las organizaciones de la sociedad civil tienen distinto carácter y propósito. Sin embargo, hay un hilo común que las une, y es que existen en la vida pública para promover el bien público. De hecho, la fortaleza de la sociedad civil de un país se utiliza con frecuencia como medida para determinar la solidez de su democracia, y esto también sucede en el caso de Sudáfrica, que tiene organizaciones de la sociedad civil dinámicas y vibrantes en diversos sectores.

82. El Gobierno siempre procura incluir a agentes de la sociedad civil en la mayor medida posible en los procesos, para que realicen aportaciones a los programas del Gobierno, los proyectos de ley y la política, así como a las consultas generales. También se ha registrado una participación significativa de estos en relación con diversas causas judiciales que afirmaron la obligación del Parlamento de facilitar la participación pública en los procesos legislativos en todos los niveles<sup>29</sup>. Algunos ejemplos de éxito en la participación de la sociedad civil son el Grupo de Trabajo Nacional sobre los Derechos de las Personas LGBTI, el proyecto de plan de acción nacional de lucha contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, un proyecto de ley relativo a un grupo de referencia sobre los tribunales tradicionales y diversos programas para aumentar la sensibilización y la educación acerca de los derechos constitucionales.

## **Obligaciones internacionales**

83. Sudáfrica ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 12 de enero de 2015. La ratificación del Pacto representa un importante paso pues le otorga mayor fuerza en la legislación nacional. La ratificación del Pacto por Sudáfrica intensificará la aplicación de los derechos socioeconómicos en el país. Sudáfrica ha presentado oportunamente varios otros informes del país en cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes<sup>30</sup>. Debe presentar su informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en abril de 2017.

84. Además de lo que antecede, Sudáfrica también ha asumido varios importantes compromisos en los planos subregional, continental e internacional sobre la promoción de los derechos humanos, incluida la promoción del empoderamiento de la mujer y el logro de la igualdad de género<sup>31</sup>.

### III. Promoción y protección de los derechos humanos

85. Sudáfrica dispone de una sólida protección constitucional de los derechos humanos, pero la verdadera prueba radica en la aplicación. El desafío consiste en asegurar que las garantías y aspiraciones de la Constitución no sean meras promesas, sino una realidad cotidiana en la vida de la población. La realización y protección de los derechos humanos se extiende a los tres poderes del Estado, que desempeñan un papel fundamental al dar significado y contenido a esos derechos. El poder ejecutivo, mediante diversas políticas, programas y medidas de gestión; el poder legislativo mediante leyes y el poder judicial a través de su doctrina jurídica. Fuera de los tres poderes del Estado, la sociedad civil es el asociado más importante del Gobierno en la búsqueda de una justicia accesible en el país.

86. Sudáfrica está comprometida con la sensibilización y la educación sobre los derechos constitucionales. El Programa del Gobierno Justicia Socioeconómica para Todos se basa en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, crear una ciudadanía informada en un entorno en que los ciudadanos no sientan temor a asumir sus derechos. El Programa tiene por objeto promover la realización de los derechos económicos, en particular para los grupos vulnerables y marginados de Sudáfrica. Pretende ayudar al Gobierno a erradicar la pobreza, promover la sostenibilidad y mejorar la gobernanza democrática y económica de los derechos socioeconómicos de conformidad con la Constitución<sup>32</sup>. El Programa ofrece subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil para promover el conocimiento y el acceso a los derechos socioeconómicos entre los grupos vulnerables y marginados. Los funcionarios de asesoramiento comunitario también son importantes, ya que a menudo constituyen la primera instancia a la que recurren las personas para recabar asistencia en materia de acceso a la justicia.

87. El Gobierno pone en práctica una serie de campañas de sensibilización sobre los derechos constitucionales y humanos, centrándose en el constitucionalismo y los derechos humanos en el contexto de la construcción nacional y la cohesión social. La Constitución se ha traducido a los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica y al braille, y se imprimieron y distribuyeron ejemplares de esta. Un folleto que contiene información básica titulado *The Constitution Made Easy for Learners* se ha distribuido a los alumnos de todo el país. Las leyes que tienen mandato constitucional<sup>33</sup> se han publicado en forma de folleto en todos los idiomas oficiales. El Concurso de las Escuelas Nacionales sobre Tribunales Simulados, una iniciativa de colaboración entre el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional, el Departamento de Educación Básica y la sociedad civil, se ha vuelto sumamente popular entre los alumnos y ha generado tanto interés que el Departamento de Educación Básica ha decidido incluir este programa en su plan de estudios.

88. Todos los años el 21 de marzo Sudáfrica celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos. Marzo ha sido declarado en Sudáfrica el mes de los derechos humanos, durante el cual se organizan celebraciones y campañas de sensibilización pública en todo el país. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica también publica periódicamente informes sobre cuestiones generales de derechos humanos, así como informes anuales sobre igualdad, derechos socioeconómicos y la evolución internacional de los derechos humanos.

89. El Gobierno sigue utilizando diversas plataformas con el objeto de consolidar, vigilar y responder con rapidez a las preocupaciones del público. Estas son, entre otras, la línea directa de la Presidencia, las oficinas públicas de enlace, las actividades de divulgación y diversos puntos de acceso en todo el país, incluidos los Centros de Servicios Thusong. El uso de *izimbizo* se plasma en un activo programa de participación recíproca mediante el cual los ciudadanos de Sudáfrica proporcionan información al Gobierno sobre la aplicación de políticas. El *imbizo*, en su forma tradicional, ha constituido un aspecto importante del sistema político de África desde hace muchos siglos. Durante el período que se examina, diversos departamentos gubernamentales celebraron numerosas *izimbizo*. La comunicación facilitada mediante plataformas directas como los acontecimientos *izimbizo* fortalecen las alianzas entre el Gobierno y las comunidades. Se pide a los responsables que asuman por lo menos diez compromisos públicos, incluidas visitas reiteradas y de seguimiento todos los años como parte del enfoque de vigilancia del desempeño general. El Parlamento también llevó a cabo varios programas de **Acercamiento del Parlamento al**

**Pueblo.** Este programa brinda a los sudafricanos la oportunidad de hacer oír su voz a través de su participación en los procesos parlamentarios.

90. El Gobierno debe hacer frente a los siguientes desafíos:

- **Despenalización del trabajo sexual.** La venta y compra de servicios sexuales y actividades conexas, y la forma en que el sistema judicial debe responder, siguen siendo objeto de considerable debate público en Sudáfrica. La disposición básica que tipifica como delito la prostitución fue impugnada en *S. c. Jordan*, en que el Tribunal determinó que la ley era constitucional, ya que no discrimina injustamente contra las mujeres y no vulnera el derecho a la privacidad, la libertad y la seguridad ni el derecho a la actividad económica. Por consiguiente, en este momento el Gobierno no está obligado constitucionalmente a modificar la legislación vigente ni a seguir un modelo determinado; se trata de una opción de política, ya que hay una serie de respuestas jurídicas posibles para hacer frente a la prostitución en las sociedades abiertas y democráticas. En el actual contexto sudafricano, el debate sobre la prostitución de adultos se complica debido a diversos factores socioeconómicos y de otra índole. Se encomendó a la Comisión de Reforma Jurídica de Sudáfrica la tarea de examinar el fragmentado marco legislativo que regula la venta y compra de servicios sexuales, examinar la necesidad de reformar la legislación en lo que respecta a la prostitución de adultos y formular otras respuestas normativas y legislativas<sup>34</sup>. Sus propuestas se encuentran actualmente ante el Gabinete.
- **Derechos de las comunidades afectadas por la minería.** Se trata de una cuestión compleja, que entraña muchos problemas de derechos humanos, la participación de dirigentes tradicionales y cuestiones relativas a los derechos sobre las tierras comunales. Hay varias iniciativas gubernamentales para fortalecer, entre otras cosas, las obligaciones de las empresas mineras hacia las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente. El Gobierno ha establecido un comité interministerial para hacer frente a la rehabilitación de localidades y comunidades mineras seriamente afectadas de todo el país y ha asignado 18.000 millones de rand a la mejora de sus condiciones socioeconómicas mediante diversos proyectos, como los relativos a la provisión de viviendas y programas de promoción de la salud<sup>35</sup>.
- **Mortalidad infantil y materna.** Sudáfrica ha hecho importantes progresos en cuanto a la mejora de la salud materna y la reducción de la mortalidad materna en los últimos dos decenios. En 2010 se calculaba que cerca de 3.000 mujeres morían durante el parto en Sudáfrica, pero las estimaciones más recientes muestran que la mortalidad materna se han reducido a la mitad. El Programa de Prevención de la Transmisión Maternoinfantil, que tiene por objeto asegurar que las mujeres infectadas por el VIH se mantengan sanas y den a luz a niños sanos, se ha ampliado rápidamente y muchas más mujeres se han beneficiado gracias a este Programa<sup>36</sup>.
- **Personas apátridas.** Aunque el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de ratificar las dos convenciones sobre la apatridia<sup>37</sup>, participó activamente en los procesos anuales del Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); impulsó la participación de los países de la región de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) en el examen de la apatridia de varias generaciones de personas provenientes de esos países que ahora viven en Sudáfrica sin que se les haya otorgado la ciudadanía; convocó una *indaba* sobre el registro de los nacimientos en diciembre de 2015; y emitió directivas alentando a todos los sudafricanos a registrar oportunamente los nacimientos de todos los niños en Sudáfrica, incluida la inscripción temprana. Sudáfrica ha promulgado legislación nacional<sup>38</sup> en consonancia con el espíritu y la letra de las convenciones destinadas a la reducción de la apatridia. A pesar de los retos que supone este fenómeno, Sudáfrica sigue comprometida con la resolución del problema de la apatridia mediante diversas políticas y medidas legislativas.
- **Inscripción temprana de los nacimientos.** El registro civil universal eficaz requiere la inscripción temprana de los nacimientos a fin de salvaguardar la

identidad y la condición de todos los sudafricanos, así como la exactitud del Registro Nacional de Población. La inscripción tardía de los nacimientos presenta riesgos<sup>39</sup>. Desde 2010 el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para afianzar la inscripción temprana de los nacimientos y para poner fin a la inscripción tardía de estos. La inscripción temprana de los nacimientos también garantiza que los niños tengan acceso a la atención de la salud, a la inmunización y a la matriculación escolar a la edad apropiada. Sudáfrica ha hecho grandes avances en relación con la inscripción temprana de los nacimientos en los últimos años<sup>40</sup>. Sudáfrica toma conocimiento de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño acerca de los obstáculos administrativos y prácticos para la inscripción de los nacimientos, incluidas medidas punitivas por la inscripción tardía, y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño relativas a la inscripción de los nacimientos para asegurar la plena conformidad con la Convención. Se redoblarán esfuerzos para responder a estas preocupaciones.

#### IV. Aplicación de las recomendaciones

91. El compromiso del Gobierno con la realización de los derechos humanos de todos dentro de sus fronteras se pone claramente de manifiesto en las políticas, disposiciones legislativas y programas iniciados para cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales a raíz de su aceptación incondicional de las recomendaciones formuladas en el segundo ciclo del EPU en 2012. Las medidas adoptadas por Sudáfrica para cumplir las recomendaciones aceptadas se resumen a continuación en relación con las directrices aprobadas y el marco temático establecido en la respuesta de Sudáfrica a las recomendaciones<sup>41</sup>. La mayoría de las recomendaciones se han aplicado y otras están en proceso de aplicación mediante iniciativas de elaboración de políticas e intervenciones programáticas (véase la matriz adjunta).

92. Los derechos humanos son un tema permanente del programa de reuniones de los directores generales<sup>42</sup>. Los grupos ministeriales supervisan la labor de los grupos de directores generales<sup>43</sup>.

#### V. Prioridades nacionales fundamentales

93. El Plan Nacional de Desarrollo orienta el programa del Gobierno. En consonancia con ello, el Gobierno se esfuerza en pos del logro de 14 resultados que figuran en su Marco Estratégico de Mediano Plazo para 2014-2019. El Marco tiene dos temas estratégicos generales, a saber, la transformación económica radical y la mejora de la prestación de servicios. El programa gubernamental de transformación económica radical se centra en poner a la economía en una senda diferente desde la perspectiva cualitativa a fin de asegurar un crecimiento más rápido y sostenible, el aumento de la inversión, el incremento del empleo, la reducción de la desigualdad y la “desracialización” de la economía.

94. Sudáfrica ha registrado mejoras visibles en los niveles de vida. El informe del país sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2013 indica que Sudáfrica ha hecho progresos importantes en relación con la mitigación de la pobreza. Sin embargo, el Gobierno es plenamente consciente de que el nivel de pobreza entre los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños, es mayor que el de los niveles de pobreza de la población en general. Los numerosos programas de mitigación de la pobreza que abordan los ingresos, el capital humano y la pobreza patrimonial han permitido que un mayor número de sudafricanos tengan acceso a alguna forma de ingresos familiares, aunque solo sean subsidios sociales o acceso gratuito a servicios básicos como vivienda, agua potable y saneamiento. En general, los sudafricanos gozan de un nivel de vida más alto y el Gobierno está plenamente comprometido con la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

## Problemas específicos

95. Resolver el problema del **desempleo** sigue siendo una de las prioridades del programa del Gobierno. Este ha elaborado diversos programas e iniciativas para crear puestos de trabajo decentes. A pesar de esas políticas y estrategias, el desempleo sigue siendo alto, y se ve agravado por la crisis en la economía mundial. La encuesta trimestral sobre la fuerza de trabajo en el tercer trimestre de 2016 muestra lo siguiente.

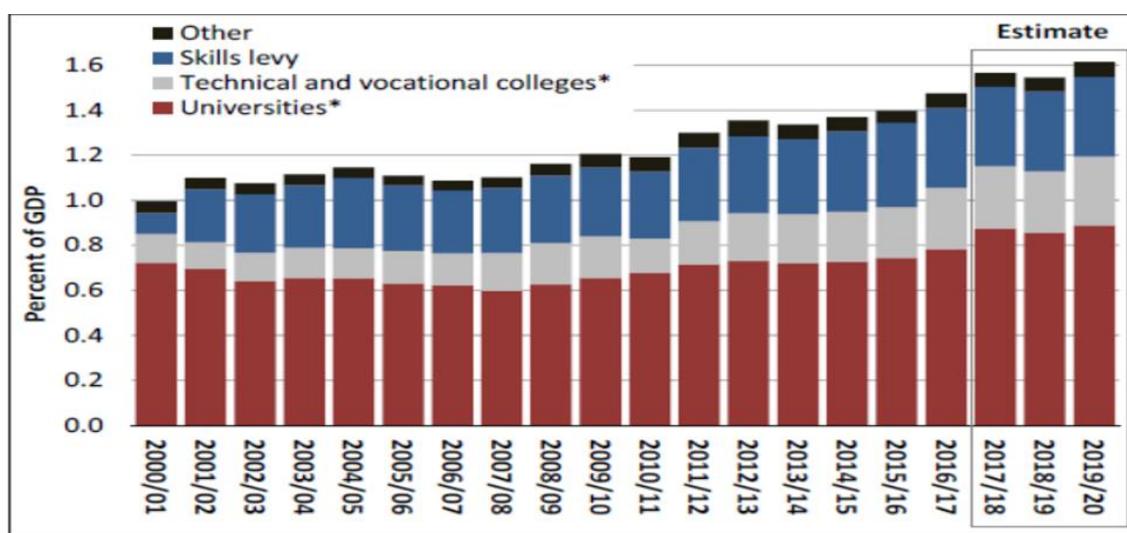
	Jul-Sep 2015	Apr-Jun 2016	Jul-Sep 2016	Qtr-to-qtr change	Year-on-year change	Qtr-to-qtr change	Year-on-year change
	Thousand			Per cent			
Population aged 15–64 yrs	36 114	36 591	36 750	159	636	0,4	1,8
Labour force	21 246	21 179	21 706	527	460	2,5	2,2
Employed	15 828	15 545	15 833	288	5	1,9	0,0
Formal sector (non-agricultural)	10 930	10 917	11 029	112	99	1,0	0,9
Informal sector (non-agricultural)	2 721	2 507	2 641	135	- 80	5,4	-2,9
Agriculture	897	825	881	56	- 16	6,8	-1,8
Private households	1 280	1 296	1 281	-15	1	-1,1	0,1
Unemployed	5 418	5 634	5 873	239	455	4,2	8,4
Not economically active	14 867	15 412	15 044	-368	176	-2,4	1,2
Discouraged work-seekers	2 226	2 526	2 291	-235	64	-9,3	2,9
Other (not economically active)	12 641	12 886	12 753	-133	112	-1,0	0,9
Rates (%)							
Unemployment rate	25,5	26,6	27,1	0,5	1,6		
Employment/population ratio (absorption rate)	43,8	42,5	43,1	0,6	-0,7		
Labour force participation rate	58,8	57,9	59,1	1,2	0,3		

96. **La pobreza y la desigualdad** siguen siendo graves problemas. A pesar de la eliminación de muchas leyes de *apartheid* de los códigos, sus consecuencias siguen definiendo el panorama económico y social de Sudáfrica. La última encuesta de ingresos y gastos examina los aumentos de ingresos según el grupo de población. Sudáfrica ha registrado los mayores aumentos de ingresos en los hogares “no blancos”. Los hogares encabezados por indios/asiáticos mostraron un aumento del 36,8%, seguidos de los hogares encabezados por africanos negros, con un 34,5% de aumento. Los hogares encabezados por mestizos registraron un aumento del 27,7% de los ingresos, mientras que los hogares encabezados por blancos mostraron solo un 0,4% de incremento real. Sin embargo, a pesar de este importante aumento de los ingresos de los hogares no blancos, persiste una enorme brecha entre los grupos de población. Los hogares encabezados por blancos perciben en promedio más de 5,5 veces los ingresos medios de los hogares encabezados por africanos negros. Así pues, aunque la tendencia de crecimiento de los ingresos es una señal sumamente positiva, la desigualdad histórica sigue siendo un grave obstáculo. Aunque los sudafricanos son cada vez más ricos en general, siguen registrándose niveles de desigualdad muy altos entre los grupos de población y dentro de estos, como lo ilustra el cuadro que figura a continuación.

	IES 2010/11 (R)	IES 2005/06 (R)	Real Growth	Increase in Rand terms
South Africa	119 542	102 401	16.7%	17 141
<b>Sex of household head</b>				
Male	151 186	127 914	18.2%	23 272
Female	70 830	62 397	13.5%	8 433
<b>Population group of household head</b>				
Black African	69 632	51 773	34.5%	17 859
Coloured	139 190	109 038	27.7%	30 152
Indian/Asian	252 724	184 711	36.8%	68 013
White	387 011	385 599	0.4%	1 412

97. La campaña estudiantil **#FeesMustFall**, que tiene por objeto eliminar los aranceles de la educación superior, comenzó en octubre de 2015 en Sudáfrica. En el marco de esta campaña, los estudiantes piden que la enseñanza superior en Sudáfrica sea gratuita. El Gobierno ha establecido la Comisión de Investigación Judicial de la Educación y Capacitación Superior para investigar la viabilidad de esta propuesta, y se espera que concluya su labor antes de finales de 2017.

98. La cuestión suscita dos preocupaciones fundamentales. En primer lugar, pese al enorme aumento de las asignaciones presupuestarias para el Plan Nacional de Ayuda Financiera a los Estudiantes, la matriculación de estudiantes que han obtenido resultados académicos meritorios y provienen de comunidades pobres ha aumentado más rápidamente que la financiación disponible. En segundo lugar, no hay un marco nacional claro para la financiación de estudiantes que, aunque no son ricos, se encuentran por encima del umbral relativamente bajo establecido en el Plan Nacional de Ayuda Financiera a los Estudiantes para la comprobación de los medios de vida. Como resultado de ello, muchos estudiantes hacen frente a dificultades financieras que socavan sus posibilidades de éxito académico. El Gobierno ha aumentado considerablemente la financiación de la educación en los últimos 20 años. La principal partida del presupuesto nacional corresponde a la educación básica. El actual marco de políticas del Gobierno insta a la progresiva ampliación de la educación possecular, dentro de los recursos disponibles. A pesar de las restricciones fiscales, las subvenciones a las universidades crecen aproximadamente un 10,9% por año y las transferencias al Plan Nacional de Ayuda Financiera a los Estudiantes aumentan aproximadamente el 18,5%, como se muestra a continuación.



\* Includes direct subsidies and allocations through NSFAS

## VI. Asistencia técnica

99. La asistencia técnica desempeña un papel importante para el logro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Sudáfrica. El país ha celebrado acuerdos bilaterales con varios países en virtud de los cuales estos le proporcionan asistencia para el desarrollo. La ayuda externa se utiliza para aumentar los recursos presupuestarios existentes a fin de asegurar la realización de todos los derechos humanos garantizados en la Constitución del país, especialmente el cumplimiento de los derechos socioeconómicos. El Gobierno de Sudáfrica acoge con satisfacción la continuidad de la valiosa asistencia técnica y para el fomento de la capacidad prestada por la comunidad internacional.

## Conclusión

100. El compromiso de Sudáfrica con la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sigue siendo inquebrantable. La reciente celebración del vigésimo aniversario de la Constitución de Sudáfrica de 1996 nos recuerda una vez más que la lucha no fue solo por la libertad política sino también por el logro de una vida mejor para todos. El EPU ayuda a Sudáfrica a evaluar el cumplimiento de su compromiso de proporcionar una vida mejor para todo su pueblo.

## Notas

- <sup>1</sup> Many rights are subject to **immediate** implementation such as the obligation to refrain from torture, discrimination on prohibited grounds, to guarantee freedom of religion and expression etc. Not all socio-economic rights are subject to “**progressive realisation**”. Some socio-economic rights such as the right to “basic education” (s 29(1)(a) of the Constitution) or “primary education” in article 13(2)(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are subject to immediate realisation (or failing which to a plan of action in terms of article 14).
- <sup>2</sup> Act No. 4 of 2000.
- <sup>3</sup> Act No. 13 of 2013.
- <sup>4</sup> Act No. 7 of 2013.
- <sup>5</sup> For instance, the Sexual Offences and Related Matters Amendment Act, 2007 (Act No. 32 of 2007) addresses the trafficking of persons for purposes of sexual exploitation, while the Children’s Act, addresses the trafficking of children.
- <sup>6</sup> Act No. 4 of 2013.
- <sup>7</sup> Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2012 [Act No. 10 of 2012]; South Africa Police Service Amendment Act, 2012 [Act No. 12 of 2012]; Use of Official Languages Act, 2012 [Act No. 20 of 2012]; Repeal of the Black Administration Act and Amendment of Certain Laws Amendment Act, 2012 [Act No. 12 of 2013]; National Health Amendment Act, 2013 [Act No. 14 of 2013]; National Environmental Management Laws Amendment Act, 2013 [Act No. 15 of 2013]; Dangerous Weapons Act, 2013 [Act No. 16 of 2013]; Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 [Act No. 17 of 2013]; Commission on Gender Equality Amendment Act, 2013 [Act No. 20 of 2013]; Basic Conditions of Employment Amendment Act, 2013 [Act No. 20 of 2013]; Merchant Shipping (International Oil Pollution) Act, 2013 [Act No. 24 of 2013]; Employment Equity Amendment Act, 2013 [Act No. 47 of 2013]; Employment Services Act, 2014 [Act No. 4 of 2014]; Marine Living Resources Amendment Act, 2014 [Act No. 5 of 2014]; Labour Relations Amendment Act, 2014 [Act No. 6 of 2014]; Mental Health Care Amendment Act, 2014 [Act No. 12 of 2014]; Infrastructure Development Act, 2014 [Act No. 23 of 2014]; National Water Amendment Act, 2014 [Act No. 27 of 2014]; Legal Practice Act, 2014 [Act No. 28 of 2014]; Rental Housing Amendment Act, 2014 [Act No. 35 of 2014]; Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2015 [Act No. 5 of 2015]; Maintenance Amendment Act, 2015 [Act No. 9 of 2015]; Refugees Amendment Act, 2015 [Act No. 10 of 2015]; Immigration Amendment Act, 2016 [Act No. 8 of 2016]; Higher Education Amendment Act, 2016 [Act No. 9 of 2016]; Unemployment Insurance Amendment Act No. 6 of 2012 [Act No. 10 of 2016]; and Children’s Amendment Act, 2016 [Act No. 17 of 2016].
- <sup>8</sup> Act No. 16 of 2013.
- <sup>9</sup> Act No. 13 of 2004.
- <sup>10</sup> Act No. 9 of 2004.
- <sup>11</sup> SA Report to the UN Committee on the Rights of the Child (2015) (para. 91).
- <sup>12</sup> Act No. 55 of 1998.
- <sup>13</sup> It contains an important amendment that prohibits anyone from requiring or permitting a child under the age of 15 years to work. It also makes it an offence for anyone to require or permit a child to perform any such work or to provide any service that places the child’s well-being at risk. The Amendment Act further empowers the Minister of Labour to regulate a broader range of matters in sectoral determinations, changes the Minister’s powers in relation to sectoral determinations and changes enforcement procedures, which are intended to simplify the Department of Labour’s ability to take enforcement steps against non-compliant employers and to access the Labour Court for this purpose.
- <sup>14</sup> Act No. 66 of 1995.
- <sup>15</sup> It is important to note that the Labour Relations Act, 1995 is currently in the process of amendment in order to address the adversarial labour relations environment characterized by the labour unrest and unprotected strikes. South Africa is also currently in the process of establishing a national minimum wage in order to address not only the low levels of wages and income poverty but also to address persistent inequality.
- <sup>16</sup> This was done in line with the ILO HIV and Aids Recommendation 2010.
- <sup>17</sup> The Immigration Act, 2002 (Act No. 13 of 2002).
- <sup>18</sup> The personnel include: (i) 1 presiding officer; (ii) 2 prosecutors; (iii) 1 intermediary; (iv) 1 designated clerk; (v) 1 designated social worker; (vi) 1 legal aid practitioner; and (vii) 1 court preparation / victim support officer.
- <sup>19</sup> Human Rights Watch, World Report, 2017.
- <sup>20</sup> The task team was, amongst others, tasked to address issues of strengthening legislation, processes, SOP, identifying areas of weaknesses which may prejudice the treatment of LGBTI, devising strategies for training on attitude and sensitivity, identifying and addressing challenges in dealing with

issues of same sex marriages. Processes relating to gender change were also revised to ensure improved turnaround time, changes in gender status and newly assumed identity documents. A circular instructing every DHA official around dealings with LGBTI persons was also issued through internal communication. On a regular basis, the Minister holds meetings and media briefings to sensitise people about a myriad of issues (including LGBTI), the human rights issues of LGBTI persons. The DHA is working around the clock to ensure the changing sex of transgender people are reflected in their ID documents; the registration of adoptions by same-sex couples; and the treatment of asylum seekers on the basis of sexual orientation. The DHA compiled and distributed a list of Home Affairs branches that offer same-sex marriage services, to avoid unnecessary inconvenience. The list was published on the departmental website. The Minister had set up a task team, consisting of departmental officials and LGBTI groups, to review legislation, clarify those areas in law that are not clear, and to standardise operations at Home Affairs. Such meetings are chaired by a DDG who reports progress to DG and Minister. Recommendations on the way forward and a timeline to resolve issues shall be tabled to the Minister in the not too distant future.

- <sup>21</sup> Legal Aid South Africa has done sterling work in advancing access to justice for indigent persons in need of legal representation, though there are still challenges in the sense that demand outweighs supply and Legal Aid South Africa is unable to assist all the persons currently in need of their services.
- <sup>22</sup> Operation Funda means Operation learn.
- <sup>23</sup> Act No. 10 of 2013.
- <sup>24</sup> 2012 (5) SA 476 (CC).
- <sup>25</sup> Paras. 67, 68.
- <sup>26</sup> 2012 (5) BCLR 537 (GSJ).
- <sup>27</sup> 2013 (9) BCLR 989 (CC).
- <sup>28</sup> In this case, a 16-year old fell pregnant. In accordance with the school's pregnancy policy, the learner would not be allowed to write her year-end examinations and would then have to repeat grade 11.
- <sup>29</sup> See, for example, *Land Access Movement of South Africa v the Chairperson of the NCOP* 2016 (5) SA 635 (CC).
- <sup>30</sup> The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) report was completed and submitted to the UN. In March 2016 the UN Committee on Human Rights reviewed the country report and dialogued with a high level South African delegation on the report. The 4th – 8th periodic reports on the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) was submitted to the UN in 2012. The review of the reports by the CERD was held in August 2016. The next 9th-11th periodic reports are due in January 2020. The report on the African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR) was submitted to the AU in February 2016 and reviewed by July 2016. The Report on the International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) Report was submitted to the UN in 2015. The Initial Report on the African Charter on the Rights and Welfare of the Child was submitted in 2014 and reviewed in 2015 and a combined 2nd, 3rd and 4th Report on the UN Committee on the Rights of the Child was submitted to the UN in 2015 (together with an initial report on the Optional Protocol on the sale of children and child prostitution and child pornography) both of which were reviewed in 2016.
- <sup>31</sup> South Africa's commitment to stamping out discrimination against women is further reflected in its accession to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women without reservations. South Africa also ratified the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women without reservations. The Government has further committed itself through the SADC Protocol on Gender and Development and the Beijing Platform of Action to undertake activities to promote the human rights of women.
- <sup>32</sup> SEJA has 6 focus areas, which include:
- Awareness of constitutional rights, with an emphasis on socio-economic rights and on vulnerable groups;
  - Enhanced participatory democracy through public policy dialogues on constitutional rights;
  - Sustained collaboration between Government, Chapter 9 institutions, civil society organisations and other stakeholders in justice service delivery and socio-economic rights (including support for community advice offices);
  - Research on socio-economic rights and jurisprudence;
  - Sector co-ordination and policy design on constitutional development, and
  - Strengthened capacity, engagement and participation of civil society organisations in the realisation of constitutional rights.
- <sup>33</sup> Such as the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, the Promotion of Administrative Justice Act and the Promotion of Access to Information Act.
- <sup>34</sup> For the sake of clarity it should be noted that the SALRC's Project 107 does not use the terminology "sex work" as this pre-supposes the recognition of the sale of sexual services as work. A policy

choice has not been made in this regard. Option 1: Repeal the Sexual Offences Act, 1957 and amend the Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Act, 2007 to criminalise prostitution and all prostitution related offences. This option is coupled to diversion as currently provided for low level crime to facilitate exit i.e total criminalisation. Option 2: Repeal the Sexual Offences Act, 1957 and amend the Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Act, 2007 to criminalise prostitution and all prostitution related offences with the exception of the person selling sexual services i.e. partial criminalisation.

- <sup>35</sup> The bulk of this funding is from the Government, with mining companies contributing approximately a third of the funding. The mandate of the IMC is to oversee the implementation of integrated and sustainable human settlements, improve living and working conditions of mine workers and determine the development path of mining towns and the historic labour sending areas. The Government has undertaken a socio-economic diagnostic study of the 15 prioritised mining towns and 12 prioritised labour sending areas to better understand the extent of the challenges in each town and to determine the most appropriate actions to address these.
- <sup>36</sup> Millennium Development Goal 5: Improve maternal health 2015/ Statistics South Africa.
- <sup>37</sup> The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
- <sup>38</sup> The Citizenship Act of 1995 and the Immigration Act of 2002.
- <sup>39</sup> The existence of LRB poses serious security risks for the country as it opens possibilities for fraudulent entries into the National Population Register.
- <sup>40</sup> From registering 39% of all births within 30 days in 2010/11, we registered approximately 67% of all births within 30 days in 2015/16.
- <sup>41</sup> Accessed on A\_HTC\_21\_16Add.1\_SouthAfrica\_E\_Annex.
- <sup>42</sup> The Justice, Crime Prevention and Security Cluster, International Cooperation, Trade and Security Cluster and Social Protection, Community and Human Development Clusters.
- <sup>43</sup> The Ministers of Justice and Correctional Services, International Relations and Cooperation and the Minister in the Presidency responsible for Performance, Monitoring and Evaluation play a political oversight role on compliance. An Inter-departmental Committee on Treaty Obligations (IDC), constituted by Government officials with technical knowledge on human rights, was established in 2013. The IDC is open-ended and chaired by the Departments of Justice and Constitutional Development and International Relations and Cooperation (DIRCO). The essence of the IDC is to deal with issues of compliance and to address the need for capacity. A Government training manual on treaty obligations has been developed and this will be complemented by other training programmes.